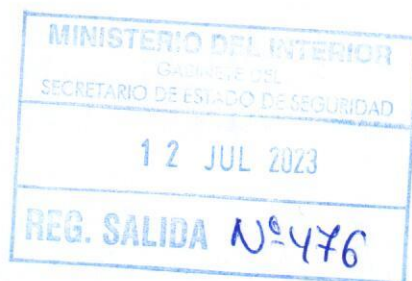




MINISTERIO
DEL INTERIOR



SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD

GABINETE

Vista la solicitud de acceso a la información pública con nº de expediente 001-079169 realizada por [REDACTED] con número de identificación [REDACTED] formulada al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIPBG), se informa lo siguiente:

En relación a la primera cuestión, el Acuerdo de Readmisión entre España y Marruecos se remite a la legislación nacional de cada una de las partes en lo referente a la materialización de las readmisiones.

En lo relativo a la coordinación, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado disponen de Unidades que desarrollan la cooperación policial con aquellos Estados con los que España comparte frontera común.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado siempre actúan conforme a lo dispuesto en la disposición adicional décima de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y en aquella otra normativa de desarrollo que sea de aplicación.

Respecto a la segunda y tercera pregunta, en las Islas Canarias, y con respecto a las llegadas de inmigrantes irregulares por vía marítima, la coordinación se realiza a través del Centro de Coordinación Regional de Canarias (CCRC), mediante el "Protocolo de Coordinación entre el Centro de Coordinación Regional de Canarias (CCRC), y los organismos implicados en las operaciones de control de la inmigración ilegal vía marítima en Canarias" de fecha 11 de diciembre de 2006.

Las competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y su ámbito territorial están establecidas normativamente. Dependiendo el tipo de situación de emergencia se activarán o no distintos protocolos, como por ejemplo el Protocolo Marco de Protección de las Víctimas de Trata de Seres Humanos, Protocolo de Actuación Policial con Menores, Protocolo Marco sobre determinadas actuaciones en relación con los Menores Extranjeros No Acompañados, Actuaciones ante víctimas de delitos sexuales, Víctimas de violencia de género, Formalizaciones de solicitudes de Protección Internacional, etc.



Con respecto a la asistencia sanitaria, todos los protocolos, acuerdos o procedimientos se han establecido principalmente entre el Servicio Canario de Salud y la Cruz Roja.

Como regla general, en las llegadas a puerto, suelen coincidir integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Salvamento Marítimo, Cruz Roja (en coordinación con el Servicio de Urgencias Canario y Atención Primaria) y Agencia FRONTEX.

Atendiendo a la cuarta y quinta cuestión, con independencia de los datos a cumplimentar en los impresos oficiales de identificación, los integrantes de las unidades especializadas formularán cuantas preguntas consideren oportunas para ampliar los datos de filiación.

Respecto a los protocolos de actuación, son procedimientos de trabajo en los que se combinan los medios humanos y materiales con los que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuentan para llevar a cabo la misión encomendada de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, así como garantizar la seguridad ciudadana, formando dichos procedimientos parte de la esfera de información sensible para el buen desempeño de estos objetivos. El éxito o no del trabajo policial depende en gran medida de la protección de estos procedimientos, tal como se reconoce en Acuerdos del Consejo de Ministros y por el Tribunal Supremo, tratando a estos procedimientos como información necesitada de protección y de un especial deber de reserva.

Por tanto, se deniega el acceso a los protocolos solicitados, conforme al artículo 14.1 d) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, “el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la seguridad pública”.

En esta línea se pronunció el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en su resolución R/0010/2015, de fecha 6 de mayo de 2015, al desestimar una petición en la que se solicitaba “el protocolo de actuación de las Unidades de Intervención de la Policía”, manifestando en los fundamentos jurídicos de la misma que “el acceso a los protocolos de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad puede poner en peligro la efectividad del ejercicio de sus funciones, con lo que la denegación de la información se considera suficientemente justificada”.

Respondiendo a la sexta pregunta, actualmente se encuentran activos los CATE de Almería, Granada, Málaga desde el año 2019, Cádiz, Murcia desde septiembre de 2022, Barranco Seco desde el año 2020, Fuerteventura desde el año 2021, Lanzarote desde el año 2021 y el de Tenerife.



En relación a la séptima cuestión, en el año 2022, llegaron diversos cayucos a El Hierro y a la Gomera, donde no hay CATE, pero la autoridad gubernativa firmó acuerdos de cesión temporal de espacios para la acogida de los migrantes

En este sentido, el pasado año 2022, en el CATE de Tenerife se atendieron a un total de 344 hombres y 3 mujeres, destacando que no se remiten datos sobre la nacionalidad de las personas expulsadas o devueltas, ya que la difusión de este tipo de datos estadísticos podría derivar en problemas en las relaciones exteriores de España con los posibles países afectados, dificultando en el futuro poder documentar por parte de las diferentes Embajadas y Consulados a ciudadanos extranjeros irregulares, lo que afectaría gravemente a la eficacia de nuevas expulsiones, aplicándose el límite al derecho de acceso del artículo 14.1 c), de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Esta limitación ha sido avalada por propio el Consejo de Transparencia en numerosas ocasiones manifestando al respecto que “dadas las circunstancias que rodean los procedimientos de expulsión, principalmente a su vinculación con la imagen pública del país de origen de estos ciudadanos y de la importancia de la colaboración de las autoridades nacionales en las labores de documentación, considera que el conocimiento de la restante información solicitada sí podría suponer un perjuicio, razonable y no hipotético, a las relaciones exteriores de España, comprometiendo la colaboración de los Estados de origen. Asimismo, y teniendo en cuenta que el procedimiento de expulsión se configura como una sanción de carácter administrativo, las dificultades derivadas de su identificación podrían perjudicar a la propia resolución del expediente de expulsión y, en consecuencia, a la sanción de la infracción cometida”.

(...) “No debe dejarse de lado la situación de nuestro país respecto de la inmigración de carácter irregular. En efecto, no se desconoce la importancia de la presión migratoria que sufre España, en su consideración de frontera exterior de la Unión Europea, así como de la importancia de la adopción y puesta en marcha efectiva de políticas que favorezcan los flujos migratorios de carácter regular, así como la lucha contra la trata de seres humanos que, en ocasiones, están implicados en estas situaciones irregulares. Esta labor de vigilancia y control de situaciones contrarias a la normativa vigente en materia de inmigración y asilo requiere de la colaboración de los países de origen, tanto para la tramitación de los expedientes de expulsión como para la adopción de medidas que frenen la trata de seres humanos. Teniendo esto en consideración, y especialmente la incidencia en la efectividad de las medidas adoptadas para el control de la inmigración irregular y la trata de seres humanos que se derivaría del acceso



a la información solicitada, este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno considera que no existe un interés superior que justifique que se proporcione la información”.

En definitiva, (...) “puesto que el elemento clave de la solicitud de acceso es precisamente conocer el país de origen, elemento que es el que puede acarrear los problemas en las relaciones exteriores de España en lo que respecta a la tramitación de los expedientes de expulsión”.

Respecto al octavo punto de la solicitud, el Ministerio del Interior en su página web ofrece datos e información relativa a Extranjería, así como de las solicitudes de Asilo tramitadas, las cuales pueden ser consultadas por años, meses y por avance trimestral, es por lo que, cualquier ciudadano puede consultarlos a través del siguiente enlace:

<https://www.interior.gob.es/opencms/es/archivos-y-documentacion/documentacion-y-publicaciones/anuarios-y-estadisticas/estadisticas-del-ministerio-del-interior/>

Se recuerda que los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) tienen por objetivo recibir a los inmigrantes en las primeras horas a su llegada, para poder facilitarles alimentos, asistencia médica, o proceder a su traslado a un centro hospitalario a aquellos que así lo requieran, así como proceder a su identificación y trámites administrativos. Una vez realizados estos trámites, serán derivados a distintos lugares dependiendo de la situación y circunstancias de cada uno. Los menores siempre son atendidos a efectos de protección, habiendo pasado por los distintos CATE en el año 2022, 2.645 menores.

Finalmente, en relación a las personas internadas en CIE del Estado, la siguiente tabla contiene la información solicitada, si bien, como se expuso anteriormente no se proporcionan datos sobre nacionalidad.

	2020	2021	2022
Hombres	2.137	1.824	2.236
Mujeres	16	17	44

Contra la presente Resolución, podrá interponerse con carácter potestativo, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de UN MES, desde el día siguiente al de la fecha de notificación de la misma, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 23 y 24 de la Ley 19/2013, en concordancia con lo establecido en el artículo 112.2 de la



Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Una vez resuelta dicha reclamación, o de no hacer uso de la misma, podrá interponer, ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de DOS MESES, desde el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa de la reclamación o en que éste deba entenderse presuntamente desestimada, y en el caso de no hacer uso de la misma, desde el día siguiente al de la notificación de esta resolución, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 20.5 de la Ley 19/2013, y 25, 26, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 11 de julio de 2023.

LA DIRECTORA DEL GABINETE



Ana María Prejigueiro Rodríguez